



Poder Judicial de la Nación  
**JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 1**

21076/2016

CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA DE LA NACION s/AMPARO AMBIENTAL

Córdoba, 13 de junio de 2016.-Por contestada la vista conferida al Sr.Fiscal Federal. Proveyendo a fs.255/298: Sin perjuicio de cumplimentar lo dispuesto por Acordada n° 3/2015 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el ingreso de copia digital al Sistema Lex 100 de la demanda presentada en el término de 24 hs de notificados, téngase a los comparecientes por presentados, por parte en el carácter invocado, con el domicilio procesal constituido en calle Bolívar n° 524. Emplácese al letrado patrocinante a fin de que en el término de 48 hs constituya y valide domicilio electrónico. A mérito de lo invocado, corresponde analizar de manera previa las condiciones de admisibilidad formal de la vía intentada, tanto respecto del Art. 43 de la Constitución Nacional, como Art.1° de la ley 16.986, en cuanto se establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, y requiere para su procedencia la existencia de un acto u omisión de autoridad pública que con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione algún derecho o garantía reconocido por la Constitución, tratado o ley.

La presente acción se inicia en contra del Estado Nacional-Ministerio de Energía y Minería de la Nación Secretaría de Recursos Hiorocarburíferos (ex Secretaría de Energía), solicitando también la citación de la firma "Porta Hnos.S.A." en el carácter de tercero. Impugnan la omisión en que habría incurrido la Autoridad Administrativa Nacional en orden al otorgamiento de la habilitación para funcionar de la planta de Bioetanol de la firma "Porta Hnos. S.A.", cuestionando también la falta de presentación y aprobación de "Evaluación de Impacto Ambiental" y la no realización de "Audiencias Públicas" previstas por la Ley General del Ambiente n° 25.675. Como asimismo fundan su pretensión en la omisión de control y fiscalización en que se habría incurrido respecto de la previsiones de la Ley 26.093 de Biocombustible y facultades de inspección previstas en el Decreto n° 109/2007. Por cuanto se habría tomado conocimiento a través de los medios y denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación del funcionamiento de la citada planta. Solicitan el cese de la contaminación ambiental disponiendo la clausura y cierre definitivo de la planta perteneciente a la citada firma.

Que, que de acuerdo a lo que se expresa por los actores, la empresa indicada dio inicio de actividades en febrero de 2012, habiendo presentado "aviso de proyecto" ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia en julio de 2012, y comenzó a funcionar aún sin haber finalizado el procedimiento de "Evaluación de Impacto Ambiental" respectivo ante la Autoridad de Aplicación de la Provincia de Córdoba, citándose al respecto el Expte.Administrativo n° 0517-018052/2012 ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. Por ello según los mismos accionantes señalan, tal empresa no ha podido tramitar en tiempo y forma la correspondiente "habilitación" ante la Secretaría de Energía de la Nación, previsto el Art.6 de la ley 26.093, todo ello de cumplimiento previo y obligatorio para la obtención de la habilitación y posterior puesta en funcionamiento. Destacan que a nivel municipal obra una "Denuncia Administrativa Exp.n° 036.511/2014 ante la Municipalidad de Córdoba efectuada por vecinos, cuestionando las autorizaciones ambientales municipales, lo que posteriormente fue desistido en sede judicial. Surge de la documental acompañada que en respuesta al reclamo de un centro vecinal REf.Expte. 360.600/12, la Municipalidad de Córdoba informó acerca de las habilitaciones e informes ambientales respectivos (fs.118/120).

En primer término, cabe poner de resalto que como se ha resuelto en jurisprudencia reiterada, "...Los jueces deben ser extremadamente prudentes y cautos en la concesión del recurso de amparo, debe reservarse exclusivamente a aquellas situaciones en que los derechos fundamentales son



allanados por actos de arbitrariedad y cuando ante la urgencia del caso resulten ineficaces las soluciones legales o reglamentarias” (C.Fed. La Plata, Sala II, 4/2/60, cit. por Sagües, Néstor. P. “Acción de Amparo, Ed.Astrea, pg.115).

En la presente acción cabe establecer que la mera invocación de los principios de la Ley General del Ambiente n° 25.675, y de las facultades concurrentes que corresponden a los niveles nacionales, provinciales y municipales de gobierno que se consagran en el Art.41 de la Constitución Nacional, no justifica la atribución genérica de un acto u omisión de autoridad pública de manifiesta arbitrariedad e ilegalidad que se sostiene en esta acción en contra del Estado Nacional. Puesto que al mismo tiempo se está denunciando a la propia empresa involucrada, por no haber culminado los trámites de habilitación ante la autoridad provincial competente, tanto en relación a la “Evaluación de Impacto Ambiental” como en lo referente a las Audiencias Públicas. Todo lo cual indica a la vez, que la acción estaría dirigida a dicha empresa y no como se acciona, solicitando su citación como tercera interesada.

Que, tampoco se puede sustentar la acción interpuesta en este fuero federal contra Estado Nacional, en el incumplimiento por parte de la firma denunciada, de las disposiciones de la Ley 26.093 de Biocombustible que prevé la habilitación para la construcción y puesta en funcionamiento de Plantas de Bioetanol, por haber incumplido el requisito previo de haber llevado a cabo el “procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental” ante la Autoridad de Aplicación, que resulta ser la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. No se advierte en grado de verosimilitud suficiente una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta de un acto u omisión de la autoridad pública nacional, que en materia ambiental ejerce un rol subsidiario a los niveles de gobierno provincial y municipal como Autoridad de Aplicación, los que se encontrarían interviniendo en lo que respecta a la habilitación respectiva. En tanto que no se verifica que se haya instado fehacientemente a la ex Secretaría de Energía de la Nación hoy Ministerio de Energía y Minería de la Nación a fin de ejercer un contralor determinado sino que se invoca la tramitación de actuaciones ante la Defensoría General de la Nación cuya presentación inicial no se acompaña.

Por lo expuesto es que la admisión de la presente acción podría resultar en una desnaturalización de los trámites y procedimientos en vigencia en los niveles de gobierno competentes que estarían interviniendo, tanto la Municipalidad de Córdoba como la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. Por lo expuesto, corresponde rechazar in límine la acción intentada (Art. 3). Dése noticia al Sr. Fiscal Federal en los términos del art. 39 de la ley 24.946.

Recuérdese al letrado interviniente la obligación a su cargo respecto de los aportes colegiales y previsionales. Notifíquese.-

RICARDO BUSTOS FIERRO  
JUEZ FEDERAL

